



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintidós de julio de dos mil veinte

S16-241

Proceso: **ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN**
Demandante: **JORGE OSWALDO GRANDA ALVAREZ**
Demandados: **ADRIANA PAOLA SÁNCHEZ RESTREPO y MARIELA DEL SOCORRO RESTREPO DE SÁNCHEZ y la sociedad TRANSPORTES BRASIL S.A.S.**
Radicado No.: **05001-31-05-006-2015-00089-01**
Tema: **legalidad de retención de liquidación y descuentos de prestaciones**
Decisión: **CONFIRMA CONDENA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 18** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que tras declararse la existencia de un contrato de trabajo con las demandadas entre el 15 de octubre de 2008 y el 5 de septiembre de 2014, se les condene a reconocer y pagar tanto las prestaciones sociales y vacaciones causadas por todo el tiempo de servicio, como la sanción moratoria prevista en el art. 99 de la ley 50 de 1990 por la no consignación de las cesantías en un fondo, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

Manifiesta el actor que prestó sus servicios como conductor de taxi, propiedad de las personas naturales demandadas, y afiliado a la sociedad accionada, que su salario era equivalente al mínimo legal y que el 5 de septiembre renunció al cargo desempeñado, adeudándole a la fecha los haberes que deprecia, entre ellos la indemnización contemplada en el art. 65 del CST.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvertieron las demandadas el derecho pretendido e indicaron frente a los hechos que eran ciertos los relativos a la actividad ejecutada, NO así la existencia del vínculo laboral. TRANSPORTES BRASIL S.A.S. recalcó que ni siquiera figuraba como empleador en el contrato de trabajo que suscribió el demandante con las señoras MARIELA DEL SOCORRO RESTREPO DE SÁNCHEZ y ADRIANA PAOLA SÁNCHEZ RESTREPO, quienes por su parte precisaron que únicamente fueron receptoras del producido en calidad de propietarias del taxi, aclarado además que el vínculo feneció el 29 de agosto de 2014 por renuncia del actor y que nunca trasladaron las cesantías a un fondo porque fueron entregadas periódicamente y en forma directa al demandante en virtud de la solicitud que este hiciera, actuando de buena fe, por lo que no era dable acceder a una sanción moratoria, partiendo de que tenían el convencimiento de no tener ninguna obligación pendiente.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 21 de septiembre de 2016 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, se **CONDENÓ** a las señoras MARIELA DEL SOCORRO RESTREPO DE SÁNCHEZ y ADRIANA PAOLA SÁNCHEZ RESTREPO, y solidariamente a la sociedad TRANSPORTE BRASIL S.A.S., a reconocer y pagar al demandante la suma de \$3.030.600 a título de cesantías causadas entre el 15 de octubre de 2008 y 31 de diciembre de 2013. Finalmente **ABSOLVIÓ** a las accionadas de las restantes pretensiones incoadas en su contra, absteniéndose de imponer una condena en costas.

Dentro del término concedido por la ley, la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ

- Que si bien no era objeto de controversia la relación laboral que existió entre el demandante y las personas naturales accionadas, lo cierto es que dicho vínculo no podría predicarse, como así se pretendía, frente a la empresa del transporte vinculada, quien por ministerio de la Ley 336 de 1996, únicamente estaba llamada a responder solidariamente por las obligaciones impuestas al empleador, siendo la única de ellas las cesantías causadas por todo el tiempo de servicio, dado que sobre las prestaciones y vacaciones causadas con antelación al 22 de enero de 2012, es decir, tres años antes de la radicación de la demanda, habían prescrito, precisando además que tendría como extremo final del vínculo, aspecto discutido, el 29 de agosto de 2014, fecha consignada en uno de los documentos allegados, toda vez que según lo expuesto en el interrogatorio, ni el demandante recordaba el día exacto en que ello sucedió.
- En tal contexto la juez cuantificó las cesantías y condenó a su pago, toda vez de acuerdo a la prohibición contemplada en el CST, no eran válidos los abonos o compensaciones realizadas por este concepto, pues la obligación era consignarlas. Dicha intelección no la extendió a los restantes haberes deprecados (intereses a las cesantías, vacaciones y prima) pues al margen de que los abonos realizados a título de prestaciones excedían el monto de lo adeudado, lo cierto era que el demandante había consentido expresamente, mediante documento suscrito ante notario, la retención de la liquidación al fenecimiento del contrato, por cuanto la señora Mariela Restrepo, días antes, asumió como codeudora una obligación del actor ante el tránsito, cuyo pago no acreditó, siendo cancelados por la demandada.
- Con base en lo expuesto, negó la sanción moratoria, añadiendo que la mala fe habría de predicarse pero frente al actor, que de lo contrario, se estaría premiando al demandante ante su descarada actuación, al involucrar a la demandada a pagar una cuantiosa suma ante el Municipio de Medellín, para luego renunciar y no suficiente con ello, pretender desconocer su firma, ya autenticada, en el documento suscrito al terminar el contrato, desconocimiento que también realizó respecto de los recibos de pago que daban cuenta de abonos imputados a la liquidación, reconociendo únicamente los que aludían a cifras bajas, pese a que en todo caso, ninguno fue tachado de falso.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PARTE ACTORA

Presentó inconformidad con la validez de los pagos o las compensaciones aludidas por la juez, toda vez que los mismos no debían tenerse en cuenta, dado que existía una prohibición legal, pues el art. 59 del CST impedía a los patronos retener suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan al trabajador sin autorización previa escrita, inexistente para el caso, de ahí que los documentos aportados debían entenderse como no escritos. Recuerda que la norma laboral es de orden público y de estricto cumplimiento, por lo que la voluntad de las partes no podía desconocer dicha norma.

Aunado a ello, el art. 115 y 151 del mismo código, regulaba el trámite de los préstamos entre el trabajador y el empleador, disposición según la cual debe señalarse un plazo y cuota para amortiguar la deuda.

En tal sentido aduce que las prestaciones sociales del demandante son intocables y los documentos aportados que daban cuenta de los préstamos no tenían validez legal.

2.3. ALEGATOS PARTE DEMANDANTE

Refiere que las demandadas nunca le consignaron al demandante las cesantías en un Fondo destinado para ello, por lo que se han hecho acreedores a la sanción que establece el art. 99 de la Ley 50 de 1990, sanción esta que corresponde a un día de salario por cada día de retardo desde el día 16 de febrero de 2009 hasta el día que se cancele el total adeudado, sanción que estaba consagrada en el Art 65 del C.S.T y de acuerdo a lo dicho por el accionante, jamás le fue consignado valor alguno por concepto de cesantías y en el expediente no obra prueba referente a esta consignación en un fondo correspondiente.

Que igualmente fue demostrado en primera instancia la existencia del contrato de trabajo entre las partes, adeudándose al trabajador los conceptos de intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, y demás prestaciones e indemnizaciones que aunque no hubiesen sido pedidas resultaron probadas dentro del proceso, esto obedeciendo a los principios de extra y ultra petita del derecho laboral.

También considera que para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, las partes demandadas debían pagar la indexación correspondiente, sobre las sumas de dinero que se adeudan desde el día 15 de octubre de 2008 hasta que se cancelara el pago total de la obligación.

Que según el art. 15 de la Ley 15 de 1999 el contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público, se entenderá celebrados con las empresas respectivas, pero para efecto de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables, asunto reiterado en el art. 150 del Decreto 266 de 2000 que modificó el art 36 de la Ley 336 de 1996.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Atendiendo a los argumentos señalados en el recurso de alzada, encuentra la Sala que la controversia **únicamente** gira en torno a determinar la validez no sólo de la multiplicidad de abonos realizados al actor *con cargo a la liquidación*, sino además del documento a través del cual se estipuló que la liquidación pendiente por los servicios prestados sería pagada al señor Jorge Granda una vez se encontrara a paz y salvo con la deuda adquirida ante el *tránsito* donde la señora Mariela Restrepo figuraba como codeudora.

Establecido lo anterior, consecuentemente se examinará si es dable ordenar el pago de la prima, vacaciones e intereses a las cesantías causadas durante todo el tiempo de servicio, análisis que **NO se extenderá** a la sanción moratoria deprecada en los alegatos, por cuanto en virtud del principio de consonancia, el objeto de estudio se debe circunscribir estrictamente a los puntos objeto de controversia, sin que en parte alguna el recurrente hubiese mencionado la procedencia de tal indemnización al sustentar el recurso de alzada.

4. CONSIDERACIONES

Sea lo primero señalar que no existe discusión alguna en los hechos relacionados con la vinculación laboral que unió a las partes del presente litigio, así como la obligación solidaria que recae en cabeza de la empresa de transporte que afilió el vehículo, los extremos temporales, el cargo desempeñado por el trabajador como conductor de taxi y la remuneración percibida, siendo tal el SMLMV para cada anualidad. Ello se desprende con facilidad de la lectura de las contestaciones y las consideraciones de la juez de cara a los puntos controvertidos por el recurrente.

Ahora, tal y como se anunció, discute el apoderado de la parte actora la validez de los recibos allegados al plenario, elaborados a mano, y que dan cuenta de diversos prestamos efectuados al demandante con cargo a la liquidación de las prestaciones en disímiles anualidades, cuya sumatoria corresponde a \$7.255.000. Ellos se avizoran a folios 65 a 75 los que, pese a no haber sido objeto de tacha por falsedad, fueron desconocidos por el demandante al absolver interrogatorio, oportunidad en la que, tras una lectura de su contenido, reconoció la firma únicamente respecto de los obrantes a folios 65, 66, 67, 73 y 75, últimos que ascienden a \$2.145.000, advirtiendo que cometió una *brutalidad al firmar papel en limpio*.

Bajo este panorama, pareciese que el demandante NO desconoce que la firma que reposa en cada documento es la suya, sino que controvierte es el contenido.

Tal situación incluso fue objeto de reproche por la falladora al advertir que el demandante sometió la autenticidad de cada firma al monto referido en cada recibo, desconociendo los más cuantiosos, lo que le restó credibilidad a sus afirmaciones.

En todo caso, aquel reconoció que las propietarias del taxi le realizaron varios préstamos, siendo muy contundente al señalar que sus *prestaciones era intocables* pero que por necesidad firmaba los recibos, pues necesitaba la plata, por ejemplo, en una ocasión, lo fue para comprarle un televisor a su hija y dárselo de aguinaldo en un diciembre, en otra para pagar una foto-multa. También acepta que se retiró voluntariamente porque durante 6 años no lo liquidaron, ni le consignaron las cesantías, pues al reclamar le contestaban que no tenían plata aunque él sabía que si tenían, entonces un día verbalmente les dijo que les daba 15 días para conseguir otro conductor.

De esta situación se duele la señora MARIELA RESTREPO DE SÁNCHEZ, quien tras relatar sus dolencias y enfermedades cardiacas, y atribuirle a su condición de salud el desorden que manejaba con el conductor, a quien veía como un hijo, indica que constantemente le hacía préstamos, uno de ellos como de un millón para enterrar a la madre de aquel y recalca que al día siguiente de haberle servido de fiadora por una deuda con el tránsito, que evidentemente pagaría con el trabajo, cesantías o prestaciones, aquel renunció. Explica que con ocasión de ello fueron hasta la notaria a firmar un documento, cuya existencia reconoce el actor, según el cual eso sólo decía que su empleadora era codeudora.

Empero, otra cosa es lo que allí estipularon las partes aquel 1 de septiembre de 2014, véase folio 76 del expediente, contentivo del acuerdo en mención, en el que expresamente se lee lo siguiente:

Por medio de la presente se deja constancia que la señora Mariela Restrepo... en reunión realizada el 15 de agosto en las oficinas del Tránsito de Caribe, firmó un documento para servir de co-deudor... por las multas e infracciones que el señor Oswaldo tiene a la fecha registradas... por un valor de \$2.390.700. Teniendo en cuenta que el pasado viernes 29 de agosto, el señor Granda presenta su renuncia verbal al cargo que ocupa actualmente como conductor del vehículo... de mi propiedad, y que lo único que existe como respaldo al acuerdo de pago... es la liquidación pendiente a la fecha, **se acuerda entre las partes, que la liquidación pendiente por los servicios prestados, será pagada al señor Oswaldo, una vez él presente el paz y salvo del acuerdo de pago, pactado ante el tránsito.**

Nótese como en un acuerdo frente al que no se alega ningún tipo de vicio en el consentimiento (error, fuerza o dolo), suscrito tres días después del fenecimiento del contrato, las partes libremente condicionan el pago de la liquidación, al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el trabajador ante el tránsito.

Y es que en un principio, conforme se desprende de las constancias obrantes a folios 121 a 123 del expediente, el 26 de junio de 2011 el actor llegó a un acuerdo de pago con la Secretaría de Transporte y Tránsito, según el cual se debía pagar una suma inicial de \$460.000 que en efecto se canceló, más doce cuotas mensuales de \$39.093. Al parecer ello no sucedió y se refinanció el crédito, momento en el cual la empleadora le sirvió de co-deudora, la que el 9 de junio de 2015 fue notificada del proceso jurídico que cursaba en su contra, por parte del Municipio de Medellín, al presentar un incumplimiento del acuerdo de pago, pues aún se adeudaba \$1.501.020.

Quiere ello decir que casi un año después de finalizado el contrato de trabajo, aún no existía un paz y salvo por parte del tránsito, autoridad ante la que figuraban 5 infracciones, 2 de 2011, 2 de 2012 y una de 2013 (fl.125).

Se ocupó la señora Mariela del Socorro Restrepo de allegar 15 cuentas de cobro efectuadas por el Municipio de Medellín, cada una con el correspondiente sello bancario de lo pagado, las que en su mayoría corresponden a cuotas que gravitan alrededor de los \$62.000. Empero, NO existe constancia que las mismas lo sean con ocasión de la deuda adquirida por el incumplimiento de quien alguna vez fuese su trabajador, quien por su parte, allega constancia del pago efectuado ante la secretaría de movilidad por valor de \$822.816, realizado el 30 de agosto de 2016, data para la cual ya estaba en curso este proceso, incluso se había llevado a cabo la audiencia de que trata el art. 77 del CPT y la SS, recibo que adolece de la misma falencia que los allegados por la

demandada, toda vez no registra si el pago responde al refinanciamiento de la deuda en la que la señora Mariela le sirvió de fiadora.

Para esclarecer este asunto, el juzgado accedió a librar un oficio con destino a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, para que remitiera copia del acuerdo de pago en mención, y certificara si fungió como co-deudora la señora Mariela Restrepo, si la obligación fue cumplida y quien asumió el pago de las cuotas. No obstante lo anterior, según consta a folios 95, el demandante lo retiró y aunque adujo que si lo radicó, no respaldó su afirmación con la correspondiente constancia, indicando que ese papel lo debía tener en el carro que actualmente conducía, situación que evidentemente causa extrañeza a la Sala, pues pareciese que estuviese obstaculizando la administración de justicia y ocultando información relevante para esclarecer los hechos debatidos.

Incluso, los dos testigos allegados por el actor, señores LUIS EDUARDO VANEGAS HERNÁNDEZ y CARLOS MARIO HOYOS ALARCON, quienes también se desempeñan como conductores de servicio público y frecuentaban el mismo acopio, son coincidentes en señalar que por voces del actor, son conocedores que las demandadas no lo liquidaban pero sí le hacían prestamos de bajo monto, para pagar foto-multa o la licencia cuando se iba a vencer. El último de ellos precisa que tenían tan buenas relaciones, que luego de terminado el contrato la demandada le sirvió de fiadora para pagar una deuda en el tránsito que el actor ya pagó.

Sin embargo, realmente la valoración de la prueba en su conjunto señala que el 15 de agosto de 2014 una de las demandadas firmó el acuerdo de pago en calidad de codeudora, al día siguiente el trabajador renunció, a voces de este le concedió 15 días para conseguir otro conductor, lapso que finalizaba terminando el mes, efectivamente culminando el contrato el día 29, hecho del que también da cuenta la *denuncia* realizada ante la personería de Medellín el 26 de junio de 2015, oportunidad en la cual las señoras Socorro Restrepo y Adriana Sánchez indicaron que el conductor entregó el taxi desvalijado, le faltaba el radio teléfono, los rines de las llantas, accesorios internos y se había alterado el taxímetro que generaba un cobro más elevado de las carreras, lo que indica que le asiste razón a la demandante, no así al actor quien aduce que ello lo fue mucho antes, el que al ser indagado puntualmente por este hecho, responde evasivamente a la juez afirmando que pagó unas cuotas y le dijo a Mariela que lo liquidara para que no subieran los intereses y le dijo que no podía, entonces como llevaban 6 años sin liquidarlo, ni consignarles cesantías pues se fue, porque producía para ella pero yo no se estaba beneficiando.

El señor Jorge Oswaldo Granda añadió en su intervención que su patrona terminó avalándolo ante la secretaría porque cuando llegaban foto-multas le decía que no tenía con que pagarlas y le pedía prestado para que le fuera sacando, le pedía que fuera poquito a poquito, pero que ella le decía que no, que lo iba apuntando a la liquidación.

Este es pues el contexto de la situación, que se efectúa con el fin de resaltar varios aspectos, de un lado, que el demandante era una persona incumplida con el pago de las obligaciones adquiridas, hacía préstamos pero ahora objeta la forma de pago que él mismo avaló al suscribir cada recibo en el que constaba que el monto adeudado sería, en otras palabras, compensado con lo adeudado a título de liquidación, que hace referencia a las prestaciones sociales y vacaciones causadas en vigencia del contrato.

De otro lado, y aunque dichos recibos no existiesen, o en efecto se hubiesen alterado colocando cifras acomodadas, hecho que en parte alguna se acreditó, a igual conclusión llegaría esta Magistratura en torno a confirmar la decisión absolutoria toda vez que el trabajador expresamente autorizó RETENER las prestaciones que en dinero le correspondían.

Tal posibilidad, contrario a la intelección que plantea el recurrente, se encuentra estipulada en el art. 59 del CST, cuyo tenor es:

PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y **prestaciones** en dinero que corresponda a los trabajadores, **sin autorización previa escrita de éstos para cada caso...**

Destáquese pues como el legislador otorgó una facultad de la que hicieron uso las partes, al prever que las compensaciones o retenciones que aquí se realizaron, gozaran de validez con cada firma plasmada no sólo en los recibos de pago, sino especialmente en el convenio suscrito ante notaria, lo que se tradujo en una autorización previa escrita por parte del señor Jorge Granda avalando lo que posteriormente fue el proceder de su empleadora.

La norma en mención contempla unas excepciones, es decir, unos casos en los que no se requiere autorización del trabajador o autoridad judicial. Nos remite la norma a lo previsto en los artículos 113, 150, 151, 152 y 400, que hacen alusión a multas, préstamos para vivienda, retención de cuotas sindicales, entre otros casos.

Sin embargo, centraremos nuestra atención en el ARTÍCULO 151, mencionado por el recurrente, que dice así:

AUTORIZACION ESPECIAL. El empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, **anticipos**, deducciones, retenciones o compensaciones **del salario**, señalando la cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para la amortización gradual de la deuda.

La preceptiva en comento, antes de ser objeto de modificación por el artículo 19 de la Ley 1429 de 2010, impedía llegar a las partes a dicho tipo de acuerdos, pues debía mediar autorización del Inspector de Trabajo, es por ello que en un inicio, pudo haberse contemplado como una de las excepciones del art. 59, pero actualmente, realmente complementa la norma.

En todo caso, acude el recurrente a esta norma para resaltar que como no se estipuló una cuota, ni un plazo para pagar la deuda, el descuento era ilegal. Empero, aquel olvida que la preceptiva alude exclusivamente a los descuentos sobre el salario, el que en parte alguna fue objeto de retención o deducción, y ello obedece a una llana situación: el conductor del taxi debía entregar diariamente a las propietarias del taxi una cuota previamente pactada que salía del producido, el excedente, comportaba el salario del actor que bajo esa modalidad, y como es de usanza en el gremio, nunca pasaba por las manos del empleador.

Es pues infructuoso el esfuerzo del apoderado del actor en el recurso de alzada al intentar restarle validez incluso al acuerdo que suscribieron las partes al fenecer el contrato, quienes en pleno uso de sus facultades legales convinieron que una vez el ex trabajador estuviese a paz y salvo con el tránsito, que realmente se refiere a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, se pagarían las prestaciones, como ello nunca sucedió, o por lo menos no se acreditó, y el trabajador continuó moroso conforme el requerimiento realizado por dicha entidad a la señora Mariela Restrepo como co-deudora, intrínsecamente operó la compensación que realmente envolvía el acuerdo aludido, pero en forma parcial, pues conforme los cálculos de la falladora, en parte alguna atacados por las partes, era muy superior el monto que debía el trabajador a su empleadora, que está a aquel por las vacaciones, prima e intereses a las cesantías que se pudieron causar.

Incluso, si en gracia de discusión, acudiésemos únicamente a los recibos correspondientes a los préstamos realizados al actor con cargo a la liquidación, tendríamos que nada se adeudaría al finalizar el contrato a título de vacaciones, prima e intereses a las cesantías.

Para finalizar, considera la Sala relevante referenciar algunas providencias dictadas por nuestro órgano de cierre, las que, en síntesis, avalan el proceder de las demandadas. Véase para el efecto la de radicación 52.526 de 2019, según la cual una vez comprobada la deuda y confesada la autorización de descuentos por parte del trabajador, este era procedente. En dicha oportunidad

rememora la 21.057, para recordar que Sala de Casación Laboral en múltiples decisiones ha adoctrinado, que cuando los descuentos o compensaciones se hacen después de terminado el contrato de trabajo, ni siquiera requiere para ello autorización escrita del trabajador.

Véase un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia la que a través de la sentencia 74363 expedida el 17 de febrero de 2020, señaló que:

De la norma transcrita es dable entender que no se puede descontar, retener, deducir o compensar valor alguno del sueldo o prestaciones de un trabajador sin la autorización expresa y por escrito de éste durante la vigencia de la relación de trabajo, para evitar abusos por parte de las empresas, pero nunca ha sido el objetivo de la ley exonerar de responsabilidades al trabajador frente a sus deudas para con la empresa.

Difiere el entendimiento de la norma cuando se está en el momento de la terminación de la relación de trabajo y el trabajador presenta deudas para con su empleador; en estos casos no se requiere, en rigor, de autorización escrita de descuento, pues las normas prohibitivas de la compensación o deducción sin autorización expresa del trabajador, rigen durante la vigencia del contrato de trabajo, pero no cuando éste termine.

Y en la de radicación 48495 de 2018 precisó que:

En el *sub lite* es claro que todos los descuentos de salario fueron autorizados expresamente por el trabajador, mediante la firma, en cada caso, del documento donde constaba el monto del préstamo y la forma de amortización. Esa práctica, que resulta usual en algunos contratos de trabajo, permite al trabajador anticipar su ingreso sin incurrir en los elevados costos que implicaría acudir a otros mecanismos de financiación, y pudo ser la que llevó al legislador a modificar el artículo 151 del estatuto laboral, que hoy en día, sin la intervención de inspectores de trabajo, salvo en el caso que se modifiquen las condiciones pactadas, permite el acuerdo directo entre empleador y trabajador para el otorgamiento de «*préstamos, anticipos, deducciones, retenciones y compensaciones de salario*».

Así las cosas, tal y como se indicó, el consentimiento del trabajador expresado en cada uno de los recibos en que constaban los anticipos efectuados, avalaba al empleador a efectuar los descuentos que realizó durante la vigencia del contrato, y si algún monto se adeudaba, se compensó con la liquidación que le hubiese podido corresponder al fenecer el vínculo.

En consecuencia, conforme los razonamientos que preceden, la decisión objeto del recurso de alzada será **CONFIRMADA** en su integridad, por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han proferido en torno al tema.

Se condenará en costas en esta instancia a la parte actora por no haber tenido éxito en el recurso, fijándose como agencias en derecho la suma de \$100.000 a cargo del demandante y a favor de cada una de las accionadas.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2016 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por señor **JORGE OSWALDO GRANDA ALVAREZ** contra las señoras **ADRIANA PAOLA SÁNCHEZ RESTREPO** y **MARIELA DEL SOCORRO RESTREPO DE SÁNCHEZ** identificados con la cédula de ciudadanía Nro. 98.550.079, 43.977.650 y 32.466.156, respectivamente y contra la sociedad **TRANSPORTES BRASIL S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como agencias en derecho la suma de \$100.000 a favor de cada una de las accionadas.

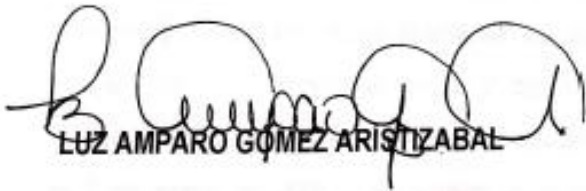
Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(firmas escaneadas)

Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS No. 096 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 23 de JULIO DE 2020

Secretario